

NAVEGANDO LA CRISIS DEL GAS: RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA CANDIDATOS PRESIDENCIALES

ABRIL DE 2026

Las organizaciones de la sociedad civil se reunieron el 18 de marzo en Bogotá para analizar la anunciada crisis del gas y reflexionar sobre cómo debería responder el próximo gobierno. Este análisis partió de reconocer que la crisis no es únicamente un problema de oferta en el corto plazo, sino una decisión estructural que puede definir la trayectoria energética y económica del país. A partir de este espacio, se identificaron una serie de consideraciones y posibles acciones iniciales que podrían orientar la toma de decisiones.

Las organizaciones de sociedad civil reconocen que:

- Colombia enfrenta una inminente escasez de gas que podría tener impactos significativos en la economía, las finanzas públicas y la vida cotidiana de la ciudadanía. Estimaciones recientes sugieren que el país podría enfrentar un **déficit** de entre el 10% y más del 30% de la demanda en **2026**, dependiendo de supuestos sobre importaciones, crecimiento de la demanda y condiciones del sistema, con efectos potenciales sobre tarifas, costos del sistema energético y la estabilidad económica.
- En el corto plazo, si el país no aumenta la oferta de gas y/o disminuye la demanda, estos déficits se intensificarán, y generarán mayores daños con el tiempo. En escenarios más adversos, el déficit podría acercarse al **40%** si no se toman medidas oportunas.
- El próximo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un periodo de tiempo limitado, particularmente en la gestión del balance entre oferta y demanda, la definición del rol del gas en la matriz energética y la priorización de inversiones, como la electrificación del transporte automotor, modificaciones en el diseño, sistema y normativas que prioricen la eficiencia energética y la electrificación, en línea con el reemplazo de sistema de calefacción y agua caliente a gas, por bombas de calor (aire, geotérmicas o solares), sustitución de estufas a gas por inducción térmica y la integración de renovables.
- Algunas cuestiones relacionadas con el gas pueden requerir mayor estudio y evaluación crítica antes de implementar cambios de política; ante el riesgo que también implica hacer inversiones públicas en infraestructura gasífera que culminen en activos varados.
- Las organizaciones de la sociedad civil destacan la necesidad de despolitizar la discusión sobre la crisis del gas y avanzar más allá de posiciones binarias, adoptando un enfoque integral que considere dimensiones económicas, sociales, ambientales y de seguridad energética.

Las organizaciones de sociedad civil advierten que:

- Uno de los principales riesgos es que las decisiones que se tomen hoy para garantizar el suministro de gas en el corto plazo podrían aumentar la probabilidad de lock-in, al direccionar recursos hacia infraestructura gasífera que comprometa inversiones futuras en alternativas más limpias, como las energías renovables, la eficiencia energética y la electrificación. El debate sobre “seguridad energética” puede ser utilizado para justificar decisiones que debiliten el avance de la transición energética.
- La creciente dependencia de importaciones de gas plantea riesgos en un contexto geopolítico incierto. Las importaciones han pasado de niveles marginales en 2022 a representar más del 20% de la demanda en 2026, con posibilidad de seguir umentando, lo cual aumenta la exposición del país a choques de precios internacionales, presiones sobre la balanza de pagos y mayor volatilidad económica
- Gobiernos anteriores han pospuesto decisiones estructurales sobre el papel del gas en la matriz energética, lo que ha generado señales de política inconsistentes y mayor incertidumbre para la planeación del sector.
- La falta de transparencia y de acceso oportuno a la información, limita la capacidad de la ciudadanía y los actores relevantes para evaluar adecuadamente las decisiones públicas.
- El marcado énfasis en el aumento de la oferta de gas, sin analizar a fondo las opciones y oportunidades para reducir la demanda genera consecuencias económicas, ambientales y de eficiencia energética que expone a déficits persistentes y costos elevados, contradiciendo metas de las NDC y de la transición justa, aumentando la vulnerabilidad climática sin bajar demanda industrial/residencial.
- El papel del gas como combustible de transición depende críticamente del control de las emisiones de metano. Si estas no se mantienen en niveles muy bajos —en rangos cercanos o superiores al 2 %—, su huella de carbono puede igualar o incluso superar la del carbón.

I. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES

- **Adoptar un enfoque gradual:** Definir una trayectoria clara en el corto, mediano y largo plazo, manteniendo como horizonte la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles
- **Abordar simultáneamente oferta y demanda:** Las soluciones deben considerar no solo el aumento del suministro, sino también la gestión activa y reducción de la demanda como eje central de la estrategia

II. ACCIONES INICIALES RECOMENDADAS:

Objetivo 1. Garantizar un suministro adecuado de gas en el corto plazo sin comprometer a Colombia con una dependencia riesgosa de largo plazo

El próximo presidente enfrentará una intensa presión para apoyar nuevos proyectos de suministro de gas. Algunas inversiones pueden ser inevitables, pero existen opciones para evitar decisiones apresuradas que, en última instancia, no sirvan a los mejores intereses de las personas ni del planeta:

Considerar apoyo selectivo a la exploración costa afuera como fuente potencial de gas, reconociendo sus límites, riesgos y costos.

En comparación con el fracking, permitir que Ecopetrol y sus socios extranjeros extraigan gas en aguas profundas podría ser una respuesta más viable y menos perjudicial a la crisis de suministro de gas. Sin embargo, la exploración costa afuera por sí sola no resolverá el déficit de gas de Colombia, y con la información disponible es difícil saber cuáles de los proyectos actuales de exploración tendrán éxito. El campo Sirius sigue siendo la principal perspectiva, está previsto para 2030, se proyecta que aumente en 200% las reservas, y tiene una capacidad de 470 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a 50% de la producción nacional para 2030, lo que implica que esta alternativa difícilmente podrá responder a las necesidades más urgentes del corto plazo, a pesar de poder estabilizar el suministro en el mediano plazo.

La producción de gas en aguas profundas implica altos riesgos de accidentes, explosiones y fugas, además de generar ruido, contaminación del agua y daños a la vida marina. El gas producido también podría ser costoso, requiriendo mayores subsidios que el gas en tierra debido a sus mayores costos de producción. En ese sentido, a cambio de apoyar cualquier proyecto costa afuera, el nuevo gobierno debería:

- Solicitar a Ecopetrol publicación de información de manera periódica, por ejemplo, el cronograma esperado de cada proyecto, los costos para el gobierno, las contribuciones a los ingresos públicos, los subsidios requeridos y la producción estimada en el tiempo.
- Garantizar el acceso público a información clara y accesible para audiencias no técnicas y a nivel local, incluyendo cronogramas, procesos de licenciamiento y procedimientos de consulta previa.
- Evaluar el uso de regalías del gas costa afuera en iniciativas de electrificación, priorizando territorios donde la expansión de infraestructura de gas no es viable o eficiente, de manera que se contribuya a cerrar brechas energéticas sin generar nuevas dependencias de combustibles fósiles.
- Acelerar los planes para eliminar progresivamente las importaciones de GNL evitando que una solución de corto plazo se convierta en una dependencia estructural de largo plazo.

Colombia tendrá que importar más gas en los próximos años para evitar desabastecimientos. Sin embargo, sin un plan de salida, la regasificación podría prolongar la dependencia del gas y

bloquear alternativas más limpias, económicas y menos riesgosas. El GNL importado tiene mayores emisiones de GEI y es significativamente más costoso que el gas producido en Colombia. Esto implica mayores costos para la sociedad, especialmente en un contexto en el que las plantas eléctricas, hogares, industria y transporte dependen de él para su energía.

Las [empresas](#) de servicios públicos y los [comercializadores mayoristas](#) de gas ya están aumentando sus precios en 2026. De acuerdo con [Naturgas](#), las tarifas del servicio incrementarán significativamente a partir de 2025. Este aumento oscilará entre el 20% y el 35%, dependiendo de la proporción de gas importado utilizada en cada región. Además, la actual guerra en Irán demuestra cómo eventos inesperados y lejanos pueden generar inestabilidad global en los mercados de GNL, lo que evidencia el impacto directo que tiene la dependencia de importaciones sobre los costos para hogares e industria. El nuevo gobierno podría:

- Encargar a la UPME y al MME la elaboración de un plan de eliminación progresiva de las importaciones de gas dentro de los seis meses posteriores a la posesión. Examinar rigurosamente la propuesta de convertir el terminal petrolero de Coveñas y los nuevos gasoductos asociados, dado su alto costo y utilidad incierta. Actualmente, Colombia está considerando hasta [14 proyectos](#) de regasificación, aunque solo 3 (Buenaventura, La Guajira y Coveñas) son probables que se materialicen en el corto plazo.
- ***Prohibición del fracking. Sus posibles beneficios son especulativos para justificar los riesgos.*** No existen estudios que hayan cuantificado los impactos socioambientales del fracking en Colombia, especialmente en relación con el agua, ni cuánto gas adicional podría aportar. Es poco probable que empresas extranjeras inviertan en fracking en Colombia a gran escala, dado el fuerte rechazo social y la inestabilidad de la política pública. Ecopetrol no cuenta con el conocimiento técnico ni el capital suficiente para desarrollar estas actividades por sí sola. El gobierno podría:
- Emitir un decreto que restringe el uso de tecnologías de fracturamiento hidráulico en Colombia para la extracción de yacimientos no convencionales (asumiendo que el Congreso no apruebe una ley).
- Instruir a Ecopetrol para que no avance en sus proyectos piloto de fracking y mantenga su política de no explorar reservas no convencionales.
- Solicitar a la ANH y a Ecopetrol evaluar cómo sostener la producción maximizando los activos existentes mediante la aceleración del desarrollo en bloques previamente adjudicados, la mejora de los factores de recobro, la optimización de campos actuales y la revisión de contratos suspendidos, evitando al mismo tiempo la expansión de la frontera exploratoria.
- Junto con las decisiones sobre fracking, anunciar la creación de zonas excluidas de actividades extractivas en áreas ambientalmente sensibles e hídricamente estratégicas, incluyendo la Amazonía y sistema de humedales. Esto enviará una señal clara del compromiso del nuevo gobierno con la protección de las personas y ecosistemas vulnerables frente a los impactos de la extracción.

Objetivo 2. Reducir la demanda de gas apoyando las alternativas más prometedoras

Para reducir exitosamente su dependencia del gas, Colombia necesita más que decisiones ad hoc de emergencia o cambios en las fuerzas del mercado. Se espera que la demanda de gas en Colombia crezca de [manera moderada](#) —alcanzando alrededor de 849 GBTUD en 2030 y cerca de 900 GBTUD en 2040 en escenarios base. Esto genera una brecha creciente entre oferta y demanda, que se proyecta aumentará significativamente en la próxima década, requiriendo una mayor dependencia de importaciones o de soluciones energéticas alternativas.

Se plantean aquí una serie de opciones sobre cómo el nuevo gobierno puede reducir la demanda mediante la identificación y el apoyo a alternativas tecnológicas asequibles y confiables, tanto en el corto como en el largo plazo:

a. Promover hogares sin gas

Los [11,9 millones](#) de hogares conectados al servicio nacional de gas consumen entre el [18 %](#) y 22 % de la demanda nacional, es decir, cerca de la quinta parte del total. Mientras que los colombianos de mayores ingresos están optando cada vez más por [soluciones eléctricas](#) en sus hogares, el uso de gas entre los hogares de menores ingresos está creciendo debido a sus menores costos iniciales y a las tarifas subsidiadas. **Para comenzar a revertir esta tendencia sin generar dificultades económicas excesivas el gobierno podría:**

- Anunciar un [programa nacional de incentivos](#) para reemplazar estufas de gas por cocinas de inducción. Los beneficios deberían dirigirse primero a los siete millones de hogares de menores ingresos (estratos 1 y 2) atendidos por NSP, que representan tres quintas partes del consumo de gas residencial.
- Para nuevas construcciones, solicitar a las autoridades subnacionales que evalúen, con base en los planes de ordenamiento territorial, y recomienden medidas de construcción sostenible, incluyendo incentivos y subsidios para desarrolladores y compradores de viviendas sin gas (por ejemplo, créditos verdes, reducción de tarifas de conexión e incentivos tributarios).
- Establecer un programa nacional de financiamiento para sustitución de gasodomésticos, mediante esquemas de pago en factura (on-bill financing) que eliminen la barrera del costo inicial para los hogares.
- Incorporar criterios de electrificación obligatoria en proyectos de vivienda de interés social (VIS y VIP) financiados con recursos públicos.
- Estructurar un programa de retiro progresivo de infraestructura de gas en zonas urbanas consolidadas, priorizando barrios con alta penetración eléctrica, para evitar costos hundidos y reducir el lock-in tecnológico.

b. Identificar alternativas de corto y mediano plazo al consumo de gas en la industria. Reducir la demanda industrial de gas es fundamental para gestionar la crisis actual y al mismo tiempo alinearse con los objetivos de descarbonización de largo plazo, reconociendo las diferencias en viabilidad tecnológica y costos entre sectores de alto y bajo consumo térmico.

La industria es hoy el mayor consumidor de gas, representando aproximadamente una cuarta parte de la demanda total. La mayor parte del gas se destina a industrias de alto consumo térmico (cemento, fertilizantes, acero, vidrio, cerámica, químicos, etc.), donde las alternativas siguen siendo experimentales y no competitivas económicamente. Sin embargo, Colombia aún cuenta con opciones, y una nueva administración puede:

- Definir, a través de la UPME una estrategia explícita de gestión de la demanda de gas natural en la industria, que articule los insumos técnicos ya disponibles —incluyendo los avances en eficiencia energética desarrollados en el marco del PROURE y el PEVI— con instrumentos regulatorios y financieros que faciliten su implementación. Esta estrategia debería priorizar alternativas costo-efectivas para reducir y optimizar el uso del gas en industrias de bajo consumo térmico (procesamiento de alimentos, bebidas, textiles, cuero, madera, papel, entre otros) y en el sector petroquímico, incluyendo la optimización de sistemas térmicos, el desplazamiento de consumos y opciones de apoyo gubernamental (como reformas regulatorias, bonos verdes, incentivos tributarios y reconfiguración de subsidios).
- Solicitar a la UPME desarrollar hojas de ruta de largo plazo para la electrificación y alternativas sostenibles al gas en industrias de alto consumo térmico.
- Encargar al MME evaluar la viabilidad de nuevos incentivos para que grandes consumidores industriales autogeneren energía a partir de FNCER, cuando esto pueda reducir significativamente la demanda sobre la red.
- Establecer metas e incentivos claros para que las empresas de petróleo y gas avancen en su descarbonización, en línea con la NDC de Colombia, reduciendo el consumo operativo de gas y la demanda total.
- Continuar fortaleciendo, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus patrimonios autónomos, el diseño e implementación de iniciativas y proyectos que impulsen la eficiencia energética en el sector industrial, promoviendo su articulación con estrategias empresariales de descarbonización alineadas con estándares internacionales como los *Science Based Targets (SBTi)*, la norma ISO 50001 y mecanismos de divulgación climática como CDP. Estas acciones deben orientarse a generar reducciones verificables en el consumo energético y la demanda de gas, al tiempo que fortalecen la competitividad industrial, habilitan el acceso a financiamiento verde y posicionan a la industria colombiana frente a exigencias emergentes como los mecanismos de ajuste en frontera por carbono (CBAM)

c. Apoyar alternativas al gas en la generación eléctrica. Sin ellas, Colombia será más vulnerable a déficits de electricidad y a una electrificación más lenta.

Colombia ha logrado avances significativos en la expansión de las [energías renovables](#), aunque persisten brechas importantes para cumplir las metas de capacidad previstas y garantizar la implementación oportuna de los proyectos.

Sin embargo, la electrificación requerirá mayor capacidad de generación en el tiempo, y la construcción de nuevas plantas térmicas a gas o grandes hidroeléctricas podría ser políticamente difícil. La red también está llegando a su límite, y la [UPME](#) prevé posibles déficits de electricidad a septiembre si el gobierno no aborda los retrasos acumulados en proyectos de generación y distribución. Ante este panorama el gobierno podría:

- Resolver los principales problemas que han alimentado la oposición a proyectos solares y eólicos a gran escala—por ejemplo, considerando beneficios locales, medidas de compensación social y ambiental, y participación comunitaria en todas las fases de implementación de los proyectos—y asegurar que el MME incluya beneficios para las comunidades como criterio en futuras subastas.
- Ordenar al MME que informe sobre cómo los sistemas de almacenamiento con baterías pueden ayudar a que la energía solar y eólica reemplacen las plantas de generación a gas existentes en la red, y qué subsidios podrían ser necesarios.
- Encargar al MME identificar y priorizar las mejoras más críticas en la red, reconociendo que esta constituye uno de los principales cuellos de botella para la transición energética.

Organizaciones participantes en el taller:

NRGI - Natural Resource Governance Institute

POLEN Transiciones Justas

Instituto 17

Transforma

SEI - Stockholm Environment Institute Latin America

Diorama Initiative